

**POSICIÓN COMÚN (CE) Nº 6/2004****aprobada por el Consejo el 5 de diciembre de 2003**

**con vistas a la adopción de la Directiva 2004/./CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ... , relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE**

(2004/C 54 E/02)

**(Texto pertinente a efectos del EEE)**

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus artículos 12, 18, 40, 44 y 52,

Vista la propuesta de la Comisión <sup>(1)</sup>,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo <sup>(2)</sup>,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones <sup>(3)</sup>,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado <sup>(4)</sup>,

Considerando lo siguiente:

- (1) La ciudadanía de la Unión confiere a todo ciudadano de la Unión un derecho primario e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.
- (2) La libre circulación de personas constituye una de las libertades fundamentales del mercado interior, que implica un espacio sin fronteras interiores en el que esta libertad estará garantizada con arreglo a las disposiciones del Tratado.
- (3) La ciudadanía de la Unión debe ser la condición fundamental de los nacionales de los Estados miembros que ejercen su derecho de libre circulación y residencia. Por ello es necesario codificar y revisar los instrumentos comunitarios existentes tratando separadamente a los asalariados, los trabajadores por cuenta propia, así como los estudiantes y las otras personas inactivas, de manera que se simplifique y refuerce el derecho de libre circulación y residencia de todos los ciudadanos de la Unión.
- (4) Para rebasar el enfoque sectorial y fragmentario del derecho de libre circulación y residencia y con el fin de facilitar el ejercicio de este derecho, es necesario un acto legislativo único que modifique el Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la

Comunidad <sup>(5)</sup>, y derogue los siguientes actos legislativos: la Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad <sup>(6)</sup>, la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios <sup>(7)</sup>, la Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia <sup>(8)</sup>, la Directiva 90/365/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional <sup>(9)</sup>, y la Directiva 93/96/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa al derecho de residencia de los estudiantes <sup>(10)</sup>.

- (5) El derecho de todo ciudadano de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, para que pueda ejercerse en condiciones objetivas de libertad y dignidad, debe serle reconocido también a los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad. A los efectos de la presente Directiva, la definición de miembro de la familia debe incluir también la pareja registrada si la legislación del Estado miembro de acogida equipara la unión registrada al matrimonio.
- (6) Para mantener la unidad de la familia en un sentido amplio y sin perjuicio de la prohibición de discriminación por motivos de nacionalidad, los Estados miembros de acogida deben estudiar, basándose en su propia legislación nacional, la situación de las personas no incluidas en la definición de miembros de la familia con arreglo a la presente Directiva y que, por consiguiente, no disfrutan del derecho automático de entrada y residencia en el Estado miembro de acogida, con objeto de decidir si se les podría permitir la entrada y la residencia, teniendo en cuenta su relación con el ciudadano de la Unión o cualquier otra circunstancia, tales como la dependencia financiera o física del ciudadano de la Unión.

<sup>(1)</sup> DO C 270 E de 25.9.2001. p. 150.

<sup>(2)</sup> DO C 149 de 21.6.2002, p. 46.

<sup>(3)</sup> DO C 192 de 12.8.2002, p. 17.

<sup>(4)</sup> Dictamen del Parlamento Europeo de 11 de febrero de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 5 de diciembre de 2003 y Posición del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).

<sup>(5)</sup> DO L 257 de 19.10.1968, p. 2. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) nº 2434/92 (DO L 245 de 26.8.1992, p. 1).

<sup>(6)</sup> DO L 257 de 19.10.1968, p. 13. Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 2003.

<sup>(7)</sup> DO L 172 de 28.6.1973, p. 14.

<sup>(8)</sup> DO L 180 de 13.7.1990, p. 26.

<sup>(9)</sup> DO L 180 de 13.7.1990, p. 28.

<sup>(10)</sup> DO L 317 de 18.12.1993, p. 59.

- (7) Conviene definir claramente la naturaleza de las formalidades relacionadas con la libre circulación de los ciudadanos de la Unión en el territorio de Estados miembros, sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de controles en las fronteras nacionales.
- (8) Con objeto de facilitar la libre circulación de los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro, conviene que quienes ya sean titulares de una tarjeta de residencia queden exentos de la obligación de visado de entrada establecida en el Reglamento (CE) nº 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación <sup>(1)</sup> o, en su caso, en la legislación nacional aplicable.
- (9) Los ciudadanos de la Unión deben disfrutar del derecho de residencia en el Estado miembro de acogida durante un período que no supere los tres meses sin estar supeditados a más condiciones o formalidades que la posesión de un documento de identidad o un pasaporte válido sin perjuicio de un tratamiento más favorable, reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para los que buscan empleo.
- (10) Conviene, sin embargo, evitar que los beneficiarios del derecho de residencia se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante un primer período de estancia. Por ello, debe supeditarse a determinadas condiciones el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia por períodos superiores a tres meses.
- (11) El derecho fundamental y personal de residencia en otro Estado miembro ha sido otorgado directamente a los ciudadanos de la Unión por el Tratado, y no depende de haber completado los procedimientos administrativos.
- (12) Para períodos de residencia superiores a tres meses, los Estados miembros deben poder requerir el registro del ciudadano de la Unión ante las autoridades competentes del lugar de residencia, acreditado por un certificado del registro a tal efecto.
- (13) Debe restringirse la exigencia de una tarjeta de residencia a los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión que no sean nacionales de un Estado miembro por períodos de residencia superiores a los tres meses.
- (14) Los justificantes requeridos por las autoridades competentes para la expedición de un certificado de registro o de una tarjeta de residencia deben precisarse de manera exhaustiva con el fin de evitar prácticas administrativas o interpretaciones divergentes que constituyan un obstáculo desproporcionado al ejercicio del derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión o de los miembros de su familia.
- (15) Conviene, por otro lado, ofrecer protección jurídica a los miembros de la familia en caso de fallecimiento del ciudadano de la Unión o de divorcio o anulación del matrimonio o de una unión de hecho registrada. Resulta pues necesario adoptar medidas que garanticen que, en tales supuestos, los miembros de la familia que residieran ya en el territorio del Estado miembro de acogida conserven su derecho de residencia, a título exclusivamente personal, con el debido respeto por la vida familiar y la dignidad humana y bajo ciertas condiciones para evitar abusos.
- (16) Los beneficiarios del derecho de residencia no podrán ser expulsados mientras no se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida. Por ello, el recurso a la asistencia social no podrá tener por consecuencia automática una medida de expulsión. Conviene que el Estado miembro de acogida examine si tal recurso obedece a dificultades temporales y que tenga en cuenta la duración de la residencia, las circunstancias personales y la cuantía de la ayuda concedida antes de poder decidir si el beneficiario se ha convertido en una carga excesiva para su asistencia social y si procede su expulsión. En ningún caso se podrá adoptar una medida de expulsión contra trabajadores por cuenta ajena o propia, o personas que buscan empleo, tal como las define el Tribunal de Justicia, salvo por razones de orden público o seguridad pública.
- (17) El disfrute de una residencia permanente para los ciudadanos de la Unión que hayan decidido instalarse de forma duradera en un Estado miembro de acogida refuerza el sentimiento de pertenencia a una ciudadanía de la Unión y es un elemento clave para promover la cohesión social, que figura entre los objetivos fundamentales de la Unión. Conviene por lo tanto establecer un derecho de residencia permanente para todos los ciudadanos de la Unión que hayan residido, en el Estado miembro de acogida de conformidad con las condiciones establecidas en la presente Directiva, durante un período ininterrumpido de cinco años de duración y sin haber sido objeto de una medida de expulsión.
- (18) Para que el derecho de residencia permanente constituya un verdadero instrumento de integración en la sociedad del Estado miembro de acogida en que reside el ciudadano de la Unión, una vez obtenido no debe estar sometido a condiciones.
- (19) Conviene mantener ciertas ventajas propias de los ciudadanos de la Unión, y de los miembros de sus familias, que ejercen una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, y que les pueden permitir obtener el derecho de residencia permanente tras una residencia en el Estado miembro de acogida inferior a cinco años, ya que constituyen derechos adquiridos conferidos por el Reglamento (CEE) nº 1251/70 de la Comisión, de 29 de junio de 1970, relativo al derecho de los trabajadores a permanecer en el territorio de un Estado miembro después haber ejercido en él un empleo <sup>(2)</sup>, y por la Directiva 75/34/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1974, relativa al derecho de los nacionales de un Estado miembro a permanecer en el territorio de otro Estado miembro después de haber ejercido en él una actividad por cuenta propia <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> DO L 81 de 21.3.2001, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 453/2003 (DO L 69 de 13.3.2003, p. 10).

<sup>(2)</sup> DO L 142 de 30.6.1970, p. 24.

<sup>(3)</sup> DO L 14 de 20.1.1975, p. 10.

- (20) En virtud de la prohibición de discriminar por razones de nacionalidad, cada ciudadano de la Unión y los miembros de su familia residentes en un Estado miembro con arreglo a la presente Directiva deben beneficiarse en ese Estado miembro de la igualdad de trato con los nacionales en el ámbito de aplicación del Tratado, con supeditación a las disposiciones específicas expresamente contempladas en el Tratado y el Derecho derivado.
- (21) No obstante, debe dejarse al Estado miembro de acogida determinar si concede prestaciones sociales durante los tres primeros meses de residencia, o un periodo mayor en el caso de los que buscan empleo, o ayudas de subsistencia por estudios, incluida la formación profesional, antes de la adquisición del derecho de residencia permanente, a los ciudadanos de la Unión que no sean asalariados o trabajadores por cuenta propia o que conserven la condición de tales, así como a los miembros de su familia.
- (22) El Tratado prevé algunas restricciones al ejercicio del derecho de libre circulación y residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Para precisar las condiciones y garantías procesales con arreglo a las cuales puede adoptarse la decisión de denegación de entrada o de expulsión de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia, la presente Directiva sustituye a la Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, sobre coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de circulación y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad pública o salud pública <sup>(1)</sup>.
- (23) La expulsión de un ciudadano de la Unión y los miembros de su familia por razones de orden público o seguridad pública constituye una medida que puede perjudicar seriamente a las personas que, haciendo uso de los derechos y libertades conferidas por el Tratado, se integraron verdaderamente en el Estado miembro de acogida. Conviene por lo tanto limitar el alcance de estas medidas de conformidad con el principio de proporcionalidad para tener en cuenta el grado de integración de las personas en cuestión, la duración de la residencia en el Estado miembro de acogida, su edad, su estado de salud y la situación familiar y económica, así como los vínculos con el país de origen.
- (24) En consecuencia, cuanto mayor sea la integración de los ciudadanos de la Unión Europea y de los miembros de su familia en el Estado miembro de acogida, tanto mayor debería ser la protección contra la expulsión. Únicamente en circunstancias excepcionales, cuando concurren razones de seguridad pública de carácter imperativo, debería adoptarse una medida de expulsión contra ciudadanos de la Unión que hayan residido durante varios años en el territorio del Estado miembro de acogida, en particular cuando hayan nacido y residido allí durante toda su vida. Además, este tipo de circunstancias excepcionales deberían también tenerse en cuenta a la hora de adoptar una medida de expulsión contra menores, a fin de salvaguardar sus relaciones familiares de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.
- (25) Conviene también precisar las garantías procesales con vistas a proporcionar un elevado nivel de protección de los derechos del ciudadano de la Unión y los miembros de su familia en caso de denegación de entrada o residencia en otro Estado miembro, así como el respeto del principio de motivación suficiente de los actos administrativos.
- (26) En cualquier caso, el ciudadano de la Unión y los miembros de su familia a los que se deniegue el derecho de entrada y residencia en otro Estado miembro deberían tener la posibilidad de recurrir ante los tribunales.
- (27) De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que prohíbe a los Estados miembros denegar de por vida la entrada a su territorio a los beneficiarios de la presente Directiva, conviene confirmar el derecho del ciudadano de la Unión o del miembro de su familia que haya sido expulsado del territorio de un Estado miembro a presentar una nueva solicitud después de un plazo razonable y, en cualquier caso, una vez transcurridos tres años desde la ejecución de la medida de expulsión definitiva.
- (28) Los Estados miembros deben poder adoptar las medidas necesarias para protegerse contra el abuso de derecho o el fraude de ley, particularmente de los matrimonios de conveniencia o cualquier otra relación contraída con el exclusivo objeto de disfrutar del derecho de libre circulación y residencia.
- (29) La presente Directiva no debe afectar a las disposiciones nacionales que sean más favorables.
- (30) Con objeto de analizar cómo facilitar aún más el ejercicio del derecho de libre circulación y residencia, la Comisión debe elaborar un informe para evaluar la oportunidad de presentar las propuestas necesarias a tal efecto, en concreto la ampliación del período de residencia sin condiciones.
- (31) La presente Directiva respeta los derechos y libertades fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de conformidad con la prohibición de discriminación que contiene la Carta, los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la misma sin discriminar entre los beneficiarios de la presente Directiva por razón de sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

<sup>(1)</sup> DO 56 de 4.4.1964, p. 850. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 75/35/CEE (DO L 14 de 20.1.1975, p. 14).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

## CAPÍTULO I

### Disposiciones generales

#### Artículo 1

#### Objeto

La presente Directiva establece:

- a) las condiciones de ejercicio del derecho de libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia;
- b) el derecho de residencia permanente en el territorio de los Estados miembros de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia;
- c) las limitaciones a los derechos establecidos en las letras a) y b) por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.

#### Artículo 2

#### Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

- 1) «Ciudadano de la Unión»: toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro.
- 2) «Miembro de la familia»:
  - a) el cónyuge;
  - b) la pareja con la que el ciudadano de la Unión ha celebrado una unión registrada, con arreglo a la legislación de un Estado miembro, si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación aplicable del Estado miembro de acogida;
  - c) los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y los del cónyuge o de la pareja definida en la letra b);
  - d) los ascendientes directos a cargo y los del cónyuge o de la pareja definida en la letra b).
- 3) «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro al que se traslada el ciudadano de la Unión para ejercer su derecho de libre circulación y residencia.

#### Artículo 3

#### Beneficiarios

1. La presente Directiva se aplicará a cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia, tal como se definen en el punto 2 del artículo 2, que le acompañen o se reúnan con él.
2. Sin perjuicio del derecho personal de los interesados a la libre circulación y a la residencia, el Estado miembro de aco-

gida facilitará, de conformidad con su legislación nacional, la entrada y la residencia de las siguientes personas:

- a) cualquier otro miembro de la familia, sea cual fuere su nacionalidad, que no entre en la definición del punto 2 del artículo 2 que, en el país de procedencia, esté a cargo o viva con el ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de residencia con carácter principal, o en caso de que, por motivos graves de salud, sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia;
- b) la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada.

El Estado miembro de acogida estudiará detenidamente las circunstancias personales y justificará toda denegación de entrada o residencia a dichas personas.

## CAPÍTULO II

### Derecho de salida y entrada

#### Artículo 4

#### Derecho de salida

1. Sin perjuicio de las disposiciones que regulan los documentos de viaje en controles fronterizos nacionales, todo ciudadano de la Unión en posesión de un documento de identidad o un pasaporte válidos y los miembros de su familia que no sean nacionales de un Estado miembro y que estén en posesión de un pasaporte válido, tendrán derecho a salir del territorio de un Estado miembro para trasladarse a otro Estado miembro.
2. A las personas contempladas en el apartado 1 no se les podrá imponer ningún visado de salida ni obligación equivalente.
3. Los Estados miembros expedirán o renovarán a sus ciudadanos, de acuerdo con su legislación, un documento de identidad o un pasaporte en el que conste su nacionalidad.
4. El pasaporte será válido al menos para todos los Estados miembros y para los países de tránsito entre éstos. En caso de que la legislación de un Estado miembro no prevea la expedición de un documento de identidad, la validez del pasaporte, desde el momento de su expedición o renovación, no podrá ser inferior a cinco años.

#### Artículo 5

#### Derecho de entrada

1. Sin perjuicio de las disposiciones que regulan los documentos de viaje en controles fronterizos nacionales, los Estados miembros admitirán en su territorio a todo ciudadano de la Unión en posesión de un documento de identidad o un pasaporte válidos y a los miembros de su familia que no sean nacionales de un Estado miembro y que estén en posesión de un pasaporte válido.

A los ciudadanos de la Unión no se les podrá imponer ningún visado de entrada ni obligación equivalente.

2. Los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro sólo estarán sometidos a la obligación de visado de entrada de conformidad con el Reglamento (CE) nº 539/2001, o, en su caso, con la legislación nacional. A los efectos de la presente Directiva, la posesión de la tarjeta de residencia válida contemplada en el artículo 10 eximirá a dichos miembros de la familia de la obligación de obtener un visado.

Los Estados miembros concederán a dichas personas todas las facilidades para obtener los visados que precisen. Estos visados se expedirán gratuitamente lo antes posible, mediante un procedimiento acelerado.

3. El Estado miembro de acogida no pondrá sello de entrada o de salida en el pasaporte de un miembro de la familia que no sea nacional de un Estado miembro, siempre y cuando el interesado presente la tarjeta de residencia prevista en el artículo 10.

4. Cuando el ciudadano de la Unión o el miembro de su familia que no sea nacional de un Estado miembro no dispongan de los documentos de viaje necesarios o, en su caso, de los visados necesarios, el Estado miembro de que se trate dará a estas personas, antes de proceder a su retorno, las máximas facilidades para que puedan obtener o recibir en un plazo razonable los documentos necesarios o para que se confirme o pruebe por otros medios su calidad de beneficiarios del derecho de libre circulación o residencia.

5. El Estado miembro podrá exigir al interesado que notifique su presencia en el territorio en un plazo de tiempo razonable y no discriminatorio. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la imposición de sanciones proporcionadas y no discriminatorias contra el interesado.

### CAPÍTULO III

#### *Derecho de residencia*

##### *Artículo 6*

#### **Derecho de residencia por un período de hasta tres meses**

1. Los ciudadanos de la Unión tendrán derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período de hasta tres meses sin estar sometidos a otra condición o formalidad que la de estar en posesión de un documento de identidad o pasaporte válidos.

2. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán asimismo a los miembros de la familia en posesión de un pasaporte válido que no sean nacionales de un Estado miembro y acompañen al ciudadano de la Unión, o se reúnan con él.

##### *Artículo 7*

#### **Derecho de residencia por más de tres meses**

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses si:

- a) es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, o
- b) dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o
- c) — está matriculado en un centro público o privado, reconocido o financiado por el Estado miembro de acogida con arreglo a su legislación o a su práctica administrativa, con la finalidad principal de cursar estudios, inclusive de formación profesional; y  
— cuenta con un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos en el Estado miembro de acogida y garantiza a la autoridad nacional competente, mediante una declaración o por cualquier otro medio equivalente de su elección, que posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, o
- d) es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión, o va a reunirse con él, y que cumple las condiciones contempladas en las letras a), b) o c).

2. El derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan con él en el Estado miembro de acogida, siempre que dicho ciudadano cumpla las condiciones contempladas en las letras a), b) o c) del apartado 1.

3. A los efectos de la letra a) del apartado 1, el ciudadano de la Unión que ya no ejerza ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantendrá la condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en los siguientes casos:

- a) si sufre una incapacidad laboral temporal resultante de una enfermedad o accidente;
- b) si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleado durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo;
- c) si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año o habiendo quedado en paro involuntario durante los primeros doce meses, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo. En este caso, la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser inferior a seis meses;
- d) si sigue una formación profesional. Salvo que se encuentre en situación de paro involuntario, el mantenimiento de la condición de trabajador exigirá que la formación guarde relación con el empleo previo.

4. No obstante lo dispuesto en la letra d) del apartado 1 y en el apartado 2, únicamente el cónyuge, la pareja registrada a que se refiere la letra b) del punto 2 del artículo 2 y los hijos a cargo tendrán el derecho de residencia como miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que cumple los requisitos de la letra c) del apartado 1 anterior. El apartado 2 del artículo 3 se aplicará a sus ascendientes directos a cargo y a los de su cónyuge o pareja de hecho registrada.

#### Artículo 8

#### Trámites administrativos para los ciudadanos de la Unión

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 5, para períodos de residencia superiores a tres meses el Estado miembro de acogida podrá imponer a los ciudadanos de la Unión la obligación de registrarse ante las autoridades competentes.

2. El plazo fijado para el registro no podrá ser inferior a tres meses a partir de la fecha de llegada. Se expedirá inmediatamente un certificado de registro que precise el nombre y dirección de la persona registrada y la fecha de registro. El incumplimiento de la obligación de registro podrá conllevar, para la persona interesada, castigos con sanciones proporcionadas y no discriminatorias.

3. Para la expedición del certificado de registro, los Estados miembros sólo podrán exigir:

- al ciudadano de la Unión contemplado en la letra a) del apartado 1 del artículo 7, que presente un documento de identidad o un pasaporte válidos y una declaración de contratación del empleador o un certificado de empleo, o una prueba de que trabaja por cuenta propia;
- al ciudadano de la Unión contemplado en la letra b) del apartado 1 del artículo 7, que presente un documento de identidad o un pasaporte válidos y una prueba de que cumple las condiciones establecidas en dicha letra;
- al ciudadano de la Unión contemplado en la letra c) del apartado 1 del artículo 7, que presente un documento de identidad o un pasaporte válidos, una prueba de que está matriculado en un centro reconocido y de que tiene un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos y la declaración o medio equivalente contemplado en dicha letra. Los Estados miembros no podrán exigir que la mencionada declaración haga referencia a una cantidad determinada en concepto de recursos.

4. Los Estados miembros no podrán establecer un importe fijo correspondiente a lo que consideran «recursos suficientes», sino que tendrán que tener en cuenta la situación personal del interesado. En cualquier caso, dicho importe no superará el nivel de recursos por debajo del cual el Estado miembro de acogida puede conceder asistencia social a sus nacionales o, cuando no pueda aplicarse tal criterio, el nivel de la pensión mínima de seguridad social pagada por el Estado miembro de acogida.

5. Para la expedición del certificado de registro a los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión que sean asimismo ciudadanos de la Unión, los Estados miembros podrán exigir la presentación de los documentos siguientes:

- a) un documento de identidad o un pasaporte válidos;

- b) un documento que acredite la existencia de parentesco o de unión registrada;

- c) en su caso, el certificado de registro del ciudadano de la Unión al que acompañan o con el que van a reunirse posteriormente;

- d) en los casos contemplados en las letras c) y d) del punto 2 del artículo 2, la prueba documental de que se cumplen los requisitos previstos en dicha disposición;

- e) en los casos contemplados en la letra a) del apartado 2 del artículo 3, todo documento expedido por la autoridad competente del país de origen o procedencia que certifique que están a cargo del ciudadano de la Unión o que vivían con él en ese país o la prueba de la existencia de motivos graves de salud que requieran estrictamente que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia;

- f) en los casos contemplados en la letra b) del apartado 2 del artículo 3, la prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de la Unión.

#### Artículo 9

#### Trámites administrativos para los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro

1. Los Estados miembros expedirán una tarjeta de residencia a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro cuando el período de residencia previsto sea superior a tres meses.

2. El plazo para presentar la solicitud de expedición de una tarjeta de residencia no podrá ser inferior a tres meses a partir de la fecha de llegada.

3. El incumplimiento de la obligación de solicitar la tarjeta de residencia podrá conllevar para la persona interesada sanciones proporcionadas y no discriminatorias.

#### Artículo 10

#### Expedición de la tarjeta de residencia

1. El derecho de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro será reconocido mediante la expedición de un documento denominado «tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión» a más tardar en los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud. Se entregará inmediatamente un resguardo de la presentación de la solicitud de una tarjeta de residencia.

2. Para la expedición de la tarjeta de residencia, los Estados miembros exigirán la presentación de los documentos siguientes:

- a) un pasaporte válido;

- b) un documento que acredite la existencia de parentesco o de unión registrada;

- c) el certificado de registro o, a falta de sistema de registro, cualquier otra prueba de residencia en el Estado miembro de acogida del ciudadano de la Unión al que acompañan o con el que vayan a reunirse posteriormente;

- d) en los casos contemplados en las letras c) y d) del punto 2 del artículo 2, la prueba documental de que se cumplen las condiciones previstas en dicha disposición;
- e) en los casos contemplados en la letra a) del apartado 2 del artículo 3, todo documento expedido por la autoridad competente del país de origen o procedencia que certifique que están a cargo del ciudadano de la Unión o que vivían con él en ese país o la prueba de la existencia de motivos graves de salud que requieran estrictamente que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia;
- f) en los casos contemplados en la letra b) del apartado 2 del artículo 3, la prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de la Unión.

#### Artículo 11

##### Validez de la tarjeta de residencia

1. La tarjeta de residencia prevista en el apartado 1 del artículo 10 tendrá una validez de cinco años a partir de su fecha de expedición o por el período previsto de residencia del ciudadano de la Unión si dicho período fuera inferior a cinco años.
2. La validez de la tarjeta de residencia no se verá afectada por ausencias temporales no superiores a seis meses al año, ni por ausencias de mayor duración para el cumplimiento de obligaciones militares, ni por una ausencia no superior a doce meses consecutivos por motivos importantes como el embarazo y el parto, enfermedad grave, estudios o una formación profesional, o el traslado por razones de trabajo a otro Estado miembro o a un tercer país.

#### Artículo 12

##### Mantenimiento del derecho de residencia de los miembros de la familia en caso de fallecimiento o partida del ciudadano de la Unión

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el fallecimiento del ciudadano de la Unión o su partida del territorio del Estado miembro de acogida no afectarán al derecho de residencia de los miembros de su familia que tengan la nacionalidad de un Estado miembro.

Antes de adquirir el derecho de residencia permanente, los propios interesados deberán cumplir las condiciones previstas en las letras a), b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1, el fallecimiento del ciudadano de la Unión no supondrá la pérdida del derecho de residencia de los miembros de su familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que hayan residido en el Estado miembro de acogida en calidad de miembros de su familia durante al menos un año antes del fallecimiento del ciudadano de la Unión.

Antes de adquirir el derecho de residencia permanente, el derecho de residencia de los interesados seguirá estando sujeto al requisito de poder demostrar que son trabajadores por cuenta ajena o propia, o que disponen, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse durante su período de residencia en una carga para la asistencia social

del Estado miembro de acogida, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o bien ser miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de una persona que cumpla estos requisitos. Los «recursos suficientes» mencionados en el párrafo segundo serán los definidos en el apartado 4 del artículo 8.

Dichos miembros de la familia seguirán conservando su derecho de residencia exclusivamente a título personal.

3. La partida del ciudadano de la Unión o su fallecimiento no supondrá la pérdida del derecho de residencia de sus hijos ni del progenitor que tenga la custodia efectiva de los hijos, con independencia de su nacionalidad, siempre que los hijos residan en el Estado miembro de acogida y estén matriculados en un centro de enseñanza para cursar estudios, y ello hasta el final de dichos estudios.

#### Artículo 13

##### Mantenimiento del derecho de residencia de los miembros de la familia en caso de divorcio, anulación del matrimonio o fin de la unión registrada

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el divorcio, la anulación del matrimonio de ciudadanos de la Unión o el fin de la unión registrada mencionada en la letra b) del punto 2 del artículo 2 no afectará al derecho de residencia de los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que tengan la nacionalidad de un Estado miembro.

Antes de adquirir el derecho de residencia permanente, los interesados deberán cumplir las condiciones previstas en las letras a), b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el divorcio, la anulación del matrimonio o el fin de la unión registrada mencionada en la letra b) del punto 2 del artículo 2 no supondrá la pérdida del derecho de residencia de los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro:

- a) cuando el matrimonio o la unión registrada haya durado, hasta iniciarse el procedimiento judicial de divorcio o de anulación o finalizar la unión registrada mencionada en la letra b) del punto 2 del artículo 2, al menos tres años, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida, o
- b) cuando la custodia de los hijos del ciudadano de la Unión hubiere sido confiada al cónyuge o a la pareja que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro por mutuo acuerdo entre los cónyuges o la pareja mencionada en la letra b) del punto 2 del artículo 2 o por decisión judicial, o
- c) cuando así lo exigieran circunstancias especialmente difíciles, como por ejemplo, haber sido víctima de violencia doméstica durante el matrimonio o la unión registrada,
- d) cuando, por mutuo acuerdo entre los cónyuges o las parejas mencionadas en la letra b) del punto 2 del artículo 2 o por decisión judicial, el cónyuge o la pareja que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro, tenga derecho a visitar al menor, siempre que el órgano judicial haya dispuesto que dicha visita tenga lugar en el Estado miembro de acogida, y por el período de tiempo que sea necesario.

Antes de adquirir el derecho de residencia permanente, el derecho de residencia de los interesados seguirá estando sujeto al requisito de poder demostrar que son trabajadores por cuenta ajena o propia, o que disponen, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse durante su período de residencia en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o bien ser miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de una persona que cumpla estos requisitos. Los «recursos suficientes» serán los definidos en el apartado 4 del artículo 8.

Dichos miembros de la familia seguirán conservando su derecho de residencia exclusivamente a título personal.

#### Artículo 14

##### **Mantenimiento del derecho de residencia**

1. Los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias gozarán del derecho de residencia previsto en el artículo 6 mientras no se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida.

2. Los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias gozarán del derecho de residencia establecido en los artículos 7, 12 y 13 mientras cumplan las condiciones en ellos previstas.

En casos específicos en los que existan dudas razonables en cuanto al cumplimiento, por parte de un ciudadano de la Unión o de los miembros de su familia, de las condiciones establecidas en los artículos 7, 12 y 13, los Estados miembros podrán comprobar si se cumplen dichas condiciones. Dicha comprobación no se llevará a cabo sistemáticamente.

3. El recurso a la asistencia social del Estado miembro de acogida de un ciudadano de la Unión o de un miembro de la su familia no tendrá por consecuencia automática una medida de expulsión.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 y sin perjuicio de las disposiciones del capítulo VI, en ningún caso podrá adoptarse una medida de expulsión contra ciudadanos de la Unión o miembros de su familia si:

- a) los ciudadanos de la Unión son trabajadores por cuenta ajena o propia, o
- b) los ciudadanos de la Unión entraron en el territorio del Estado miembro de acogida para buscar trabajo. En este caso, los ciudadanos de la Unión o los miembros de sus familias no podrán ser expulsados mientras los ciudadanos de la Unión puedan demostrar que siguen buscando empleo y que tienen posibilidades reales de ser contratados.

#### Artículo 15

##### **Garantías de procedimiento**

1. Los procedimientos previstos en los artículos 30 y 31 se aplicarán, por analogía, a toda decisión que restrinja la libertad de circulación del ciudadano de la Unión o los miembros de su familia por motivos que no sean de orden público, seguridad pública o salud pública.

2. La expiración del documento de identidad o del pasaporte con el que el interesado entró en el territorio del Estado miem-

bro de acogida y en base al cual se expidió un certificado de registro o una tarjeta de residencia no constituirá un motivo de expulsión del Estado miembro de acogida.

3. El Estado miembro de acogida no podrá acompañar la decisión de expulsión, contemplada en el apartado 1, de una prohibición de entrada en el territorio.

#### CAPÍTULO IV

##### **Derecho de residencia permanente**

#### Sección I

##### **Adquisición**

#### Artículo 16

##### **Norma general para los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia**

1. Los ciudadanos de la Unión que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años en el Estado miembro de acogida tendrán un derecho de residencia permanente en éste. Dicho derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III.

2. El apartado 1 será asimismo aplicable a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años consecutivos con el ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida.

3. La continuidad de la residencia no se verá afectada por ausencias temporales no superiores a un total de seis meses al año, ni por ausencias de mayor duración para el cumplimiento de obligaciones militares, ni por ausencias no superiores a doce meses consecutivos por motivos importantes como el embarazo y el parto, una enfermedad grave, la realización de estudios o una formación profesional, o el traslado por razones de trabajo a otro Estado miembro o a un tercer país.

4. Una vez adquirido, el derecho de residencia permanente sólo se perderá por ausencia del Estado miembro de acogida durante más de dos años consecutivos.

#### Artículo 17

##### **Excepciones para los trabajadores que cesen su actividad en el Estado miembro de acogida y los miembros de sus familias**

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, tendrá derecho de residencia permanente en el Estado miembro de acogida antes de que finalice un período continuo de residencia de cinco años:

- a) el trabajador por cuenta propia o ajena que, en el momento de cesar su actividad, haya alcanzado la edad prevista por la legislación de este Estado miembro para adquirir el derecho a una pensión de jubilación o el trabajador por cuenta ajena que deje de ocupar la actividad remunerada con motivo de una jubilación anticipada, cuando haya ejercido su actividad en ese Estado miembro durante al menos los últimos doce meses y haya residido en el mismo de forma continuada durante más de tres años.



En caso de que la legislación del Estado miembro de acogida no conceda el derecho a pensión de jubilación a determinadas categorías de trabajadores autónomos, el requisito de edad se considerará cumplido cuando el interesado haya alcanzado los 60 años de edad;

- b) el trabajador por cuenta propia o ajena que, habiendo residido de forma continuada en el Estado miembro de acogida durante más de dos años, cese en su actividad a causa de una incapacidad laboral permanente.

Si esta incapacidad es consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional que dé derecho al interesado a una prestación total o parcialmente a cargo de una institución del Estado miembro de acogida, no se exigirá ninguna condición de duración de residencia;

- c) el trabajador por cuenta propia o ajena que, después de tres años consecutivos de actividad y residencia en el Estado miembro de acogida, ejerza una actividad por cuenta propia o ajena en otro Estado miembro, pero conserve su residencia en el Estado miembro de acogida, al que regresa, por norma general, diariamente o al menos una vez por semana.

A efectos de adquisición de los derechos previstos en las letras a) y b) los períodos de actividad ejercidos en el Estado miembro en que esté trabajando el interesado se considerarán cumplidos en el Estado miembro de acogida.

Los períodos de desempleo involuntario, debidamente justificados por el servicio de empleo competente, o los períodos de suspensión de la actividad independientes de la voluntad del interesado, y las ausencias del puesto de trabajo o las bajas por enfermedad o accidente se considerarán como períodos de empleo.

2. Las condiciones de duración de residencia y actividad previstas en la letra a) del apartado 1 y la condición de duración de residencia prevista en la letra b) del apartado 1 no se exigirán si el cónyuge del trabajador por cuenta ajena o propia, o su pareja conforme se define en la letra b) del punto 2 del artículo 2, es ciudadano del Estado miembro de acogida o si ha perdido la nacionalidad de este Estado miembro tras su matrimonio con el trabajador por cuenta ajena o propia.

3. Los miembros de la familia del trabajador por cuenta propia o ajena que residan con él en el territorio del Estado miembro de acogida tendrán, independientemente de su nacionalidad, derecho de residencia permanente en dicho Estado miembro cuando el propio trabajador por cuenta ajena o propia haya adquirido para sí el derecho de residencia permanente en dicho Estado miembro con arreglo al apartado 1.

4. No obstante, en caso de que el trabajador por cuenta propia o ajena falleciese durante su vida profesional antes de haber adquirido el derecho de residencia permanente en el territorio del Estado miembro de acogida con arreglo al apartado 1, los miembros de su familia que residan con él en el Estado miembro de acogida adquirirán el derecho de residencia permanente en el territorio de dicho Estado, a condición de que:

- a) en la fecha de su fallecimiento el trabajador por cuenta propia o ajena hubiera residido de forma continuada en el territorio de este Estado miembro durante dos años, o
- b) su fallecimiento haya sido consecuencia de un accidente laboral o de una enfermedad profesional, o

- c) el cónyuge supérstite hubiera perdido la nacionalidad de ese Estado miembro como consecuencia de su matrimonio con el trabajador por cuenta ajena o propia.

#### Artículo 18

### **Adquisición del derecho de residencia permanente de determinados miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro**

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión contemplados en el apartado 2 del artículo 12 y en el apartado 2 del artículo 13, que cumplan las condiciones en ellos previstas, adquirirán el derecho de residencia permanente tras haber residido legalmente, durante cinco años consecutivos, en el Estado miembro de acogida.

#### Sección II

### **Trámites administrativos**

#### Artículo 19

### **Documento acreditativo de la residencia permanente de los ciudadanos de la Unión**

1. A petición de los interesados, los Estados miembros expedirán a los ciudadanos de la Unión con derecho de residencia permanente un documento que certifique dicha residencia permanente, tras verificar la duración de la misma.

2. El documento acreditativo de la residencia permanente se expedirá lo antes posible.

#### Artículo 20

### **Tarjeta de residencia permanente para miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro**

1. Los Estados miembros expedirán a los miembros de la familia con derecho de residencia permanente que no sean nacionales de un Estado miembro una tarjeta de residencia permanente en un plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud. La tarjeta de residencia permanente será renovable automáticamente cada diez años.

2. La solicitud de tarjeta de residencia permanente se presentará antes de que expire la primera tarjeta de residencia. El incumplimiento de la obligación de solicitar la tarjeta de residencia permanente podrá conllevar para la persona interesada sanciones proporcionadas y no discriminatorias.

3. Las interrupciones de la residencia no superiores a dos años consecutivos no afectarán a la validez de la tarjeta de residencia permanente.

#### Artículo 21

### **Continuidad de la residencia**

A efectos de la presente Directiva, la continuidad de la residencia podrá ser acreditada mediante cualquier medio de prueba vigente en el Estado miembro de acogida. La continuidad de la residencia se verá interrumpida por cualquier decisión de expulsión ejecutada válidamente contra el interesado.

## CAPÍTULO V

**Disposiciones comunes al derecho de residencia y al derecho de residencia permanente**

## Artículo 22

**Ámbito territorial**

El derecho de residencia y el derecho de residencia permanente se extenderán a todo el territorio del Estado miembro de acogida. Los Estados miembros sólo podrán establecer limitaciones territoriales al derecho de residencia o al derecho de residencia permanente cuando éstas estén previstas también para sus propios nacionales.

## Artículo 23

**Derechos derivados**

Los miembros de la familia del ciudadano de la Unión, independientemente de su nacionalidad, beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente en un Estado miembro, tendrán derecho a trabajar por cuenta propia o ajena.

## Artículo 24

**Igualdad de trato**

1. Con sujeción a las disposiciones específicas expresamente establecidas en el Tratado y el Derecho derivado, todos los ciudadanos de la Unión que residan en el Estado miembro de acogida en base a la presente Directiva gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales de dicho Estado en el ámbito de aplicación del Tratado. El beneficio de este derecho se extenderá a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, durante los primeros tres meses de residencia o, si procede, el período más largo establecido en la letra b) del apartado 4 del artículo 14, el Estado miembro de acogida no estará obligado a conceder el derecho a prestaciones de asistencia social, ni estará obligado, antes de la adquisición del derecho de residencia permanente, a conceder ayudas de manutención consistentes en becas o préstamos de estudios, incluidos los de formación profesional, a personas que no sean trabajadores por cuenta propia o ajena, personas que mantengan dicho estatuto o miembros de sus familias.

## Artículo 25

**Disposiciones generales relativas a los documentos de residencia**

1. La posesión del certificado de registro contemplado en el artículo 8, un documento acreditativo de la residencia permanente, un resguardo de presentación de la solicitud de tarjeta de residencia de miembro de la familia o una tarjeta de residencia permanente no podrá constituir en ningún caso una condición previa para el ejercicio de un derecho o la realización de un trámite administrativo, ya que la situación de beneficiario de los derechos puede acreditarse por cualquier otro medio de prueba.

2. Los documentos mencionados en el apartado 1 se expedirán con carácter gratuito o previo abono de una cantidad que no rebasará la impuesta a los nacionales para la expedición de documentos similares.

## Artículo 26

**Controles**

Los Estados miembros podrán efectuar controles para verificar el cumplimiento de cualquier requisito derivado de Derecho nacional de que los no nacionales deban estar siempre provistos del certificado de registro o la tarjeta de residencia, a condición de que impongan la misma obligación a sus propios nacionales por lo que se refiere al documento de identidad. En caso de incumplimiento de esta obligación, los Estados miembros podrán imponer sanciones similares a las que aplican a sus propios nacionales en caso de no estar provistos de su documento de identidad.

## CAPÍTULO VI

**Limitaciones del derecho de entrada y del derecho de residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública**

## Artículo 27

**Principios generales**

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados miembros podrán limitar la libertad de circulación y residencia de un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad, por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Estas razones no podrán alegarse con fines económicos.

2. Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas.

La conducta personal del interesado deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. No podrán argumentarse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general.

3. Para comprobar si el interesado constituye un peligro para el orden público o la seguridad pública, en el momento de expedirse el certificado de registro o, a falta de un sistema de registro, a más tardar tres meses después de su entrada en el territorio o a partir de la fecha de la notificación de su presencia en el territorio, tal como se establece en el apartado 5 del artículo 5, o en el momento de expedirse la tarjeta de residencia, el Estado miembro de acogida podrá, cuando lo juzgue indispensable, pedir al Estado miembro de origen y, en su caso, a otros Estados miembros información sobre los eventuales antecedentes penales de un interesado. Esta consulta no podrá tener carácter sistemático. El Estado miembro consultado deberá hacer llegar su respuesta en el plazo de dos meses.

4. El Estado miembro que haya expedido el pasaporte o documento de identidad recibirá sin trámite alguno en su territorio al titular de dicho documento que haya sido expulsado por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, aun cuando el documento haya expirado o se haya impugnado la nacionalidad del titular.

#### Artículo 28

##### Protección contra la expulsión

1. Antes de tomar una decisión de expulsión del territorio por razones de orden público o seguridad pública, el Estado miembro de acogida deberá tener en cuenta, en particular, la duración de la residencia del interesado en su territorio, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, su integración social y cultural en el Estado miembro de acogida y la importancia de los vínculos con su país de origen.

2. El Estado miembro de acogida no podrá tomar una decisión de expulsión del territorio contra un ciudadano de la UE o un miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad, que haya adquirido un derecho de residencia permanente en su territorio, excepto por motivos graves de orden público o seguridad pública.

3. No se podrá adoptar una decisión de expulsión contra un ciudadano de la Unión, excepto si la decisión se basa en motivos imperiosos de seguridad pública tal que definidos por los Estados miembros, cuando éste:

- a) haya residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores, o
- b) sea menor de edad, salvo si la expulsión es necesaria en interés del niño, tal como establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989.

#### Artículo 29

##### Salud pública

1. Las únicas enfermedades que podrán justificar una medida que limite la libertad de circulación serán las enfermedades con potencial epidémico como se definen en los instrumentos correspondientes de la Organización Mundial de la Salud, así como otras enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas siempre que sean, en el país de acogida, objeto de disposiciones de protección para los nacionales.

2. Las enfermedades que sobrevengan en el período de tres meses siguiente a la fecha de llegada no podrán justificar la expulsión del territorio.

3. Si existen indicios graves que lo justifiquen, un Estado miembro podrá someter a los beneficiarios del derecho de residencia, en los tres meses siguientes a la fecha de su llegada,

a un reconocimiento médico gratuito para que se certifique que no padecen las enfermedades mencionadas en el apartado 1. Dichos reconocimientos médicos no podrán exigirse con carácter sistemático.

#### Artículo 30

##### Notificación de las decisiones

1. Toda decisión adoptada en virtud del apartado 1 del artículo 27 deberá notificarse al interesado por escrito, en condiciones tales que le permitan entender su contenido e implicaciones.

2. Se comunicarán al interesado, con precisión y por extenso, las razones de orden público, seguridad pública o salud pública en las que se base la decisión que le afecte, a menos que a ello se opongan razones de seguridad del Estado.

3. En la notificación se indicará la jurisdicción o instancia administrativa ante la cual el interesado puede interponer recurso, así como el plazo establecido para ello y, cuando proceda, el plazo concedido para abandonar el territorio del Estado miembro. Excepto en casos urgentes debidamente justificados, dicho plazo no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de notificación.

#### Artículo 31

##### Garantías procesales

1. Cuando se tome una decisión contra él por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, el interesado podrá interponer los recursos judiciales y, en su caso, administrativos del Estado miembro de acogida o solicitar la revisión de la misma.

2. Cuando la solicitud de recurso judicial o administrativo de la decisión de expulsión vaya acompañada de la solicitud de una orden provisional de suspensión de la ejecución de dicha decisión, no podrá producirse la expulsión en sí hasta el momento en que se haya adoptado la decisión sobre la orden provisional excepto si:

- la decisión de expulsión se basa en una decisión judicial anterior, o si
- las personas afectadas han tenido acceso previo a la revisión judicial, o si
- la decisión de expulsión se basa en motivos imperiosos de seguridad pública conforme al apartado 3 del artículo 28.

3. El procedimiento de recurso permitirá el examen de la legalidad de la decisión, así como de los hechos y circunstancias en que se basa la medida propuesta. Garantizará asimismo que la decisión no sea desproporcionada, en particular, respecto de los requisitos establecidos en el artículo 28.

4. Los Estados miembros podrán rechazar la presencia del interesado en su territorio durante el procedimiento de recurso, pero no podrán prohibirle que presente su defensa en persona en la vista excepto por motivos graves de orden público o seguridad pública o cuando el recurso judicial o administrativo se refiera a una denegación de entrada en el territorio.

#### Artículo 32

##### Vigencia de una prohibición de entrada en el territorio

1. La persona que haya sido objeto de una decisión de prohibición de entrada en el territorio por razones de orden público, seguridad pública o salud pública podrá presentar una solicitud de levantamiento de la prohibición tras un plazo razonable en función de las circunstancias y, en cualquier caso, tres años después de la ejecución de la decisión definitiva de prohibición que haya sido válidamente adoptada a efectos del Derecho comunitario, alegando motivos que puedan demostrar un cambio material de las circunstancias que justificaron la prohibición de entrada en el territorio.

El Estado miembro afectado deberá pronunciarse sobre dicha solicitud en un plazo de seis meses a partir de su presentación.

2. La persona contemplada en el apartado 1 no tendrá derecho alguno de entrada en ese territorio mientras se examina su solicitud.

#### Artículo 33

##### Expulsión como pena o medida accesoria

1. El Estado miembro de acogida sólo podrá emitir una orden de expulsión del territorio como pena o medida accesoria a una pena de privación de libertad, cuando dicha orden cumpla los requisitos de los artículos 27, 28 y 29.

2. Cuando una orden de expulsión de las contempladas en el apartado 1 vaya a ejecutarse más de dos años después de haberse dictado, el Estado miembro deberá comprobar la actualidad y realidad de la amenaza para el orden público o la seguridad pública que representa el interesado y examinar cualquier cambio material de circunstancias que pudiera haberse producido desde el momento en que se emitió la orden de expulsión.

#### CAPÍTULO VII

##### Disposiciones finales

#### Artículo 34

##### Publicidad

Los Estados miembros difundirán información sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias con respecto a las materias reguladas por la presente Directiva, en particular, mediante campañas de divulgación y concienciación realizadas a través de los medios de comunicación nacionales y locales u otros medios de comunicación.

#### Artículo 35

##### Abuso de derecho

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para denegar, extinguir o retirar cualquier derecho conferido por la presente Directiva en caso de abuso de derecho o fraude, como los matrimonios de conveniencia. Estas medidas serán proporcionadas y estarán sometidas a las garantías procesales contempladas en los artículos 30 y 31.

#### Artículo 36

##### Sanciones

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas deberán ser efectivas y proporcionadas. Los Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión a más tardar el ... (\*), y le notificarán cuanto antes cualquier modificación posterior que pueda producirse.

#### Artículo 37

##### Disposiciones nacionales más favorables

Las disposiciones de la presente Directiva no afectarán a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de un Estado miembro que sean más favorables para los beneficiarios de la presente Directiva.

#### Artículo 38

##### Derogación

1. Quedan derogados, con efectos a partir de ... (\*), los artículos 10 y 11 del Reglamento (CEE) nº 1612/68.

2. Quedan derogadas, con efectos a partir de ... (\*), las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

3. Las referencias a las disposiciones de las Directivas derogadas se entenderán hechas a la presente Directiva.

#### Artículo 39

##### Informe

A más tardar el ... (\*\*), la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva así como cualquier propuesta que considere necesaria, en particular sobre la oportunidad de ampliar el período en el que los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias pueden residir en el territorio del Estado miembro de acogida sin condiciones. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para elaborar dicho informe.

(\*) Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(\*\*) Cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

*Artículo 40***Incorporación al Derecho nacional**

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del ... (\*).

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva, así como una tabla de correspondencias entre las disposiciones de la presente Directiva y las disposiciones nacionales adoptadas.

*Artículo 41***Entrada en vigor**

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

*Artículo 42***Destinatarios**

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en ...

*Por el Parlamento Europeo*

*El Presidente*

*Por el Consejo Europeo*

*El Presidente*

---

(\*) Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

### I. INTRODUCCIÓN

La Comisión presentó al Consejo su propuesta el 2 de julio de 2001 <sup>(1)</sup>.

El Comité de las Regiones emitió su dictamen el 13 de marzo de 2002 <sup>(2)</sup>.

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 24 de abril de 2002 <sup>(3)</sup>.

El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 11 de febrero de 2003, aprobando 82 enmiendas a la propuesta inicial.

Teniendo en cuenta el resultado de la primera lectura del Parlamento Europeo, la Comisión aprobó una propuesta modificada el 15 de abril de 2003.

La propuesta se basa en el artículo 12, en el apartado 2 del artículo 18 y en los artículos 40, 44 y 52 del Tratado CE. Debe adoptarse en codecisión con el Parlamento Europeo, y el Consejo habrá de pronunciarse por mayoría cualificada.

En virtud del procedimiento de codecisión (artículo 251 del Tratado CE), el 5 de diciembre de 2003 el Consejo, teniendo en cuenta la primera lectura del Parlamento Europeo, adoptó su posición común sobre el proyecto de Directiva.

### II. OBJETIVO

La Directiva propuesta se enmarca en el entorno jurídico y político que establece la ciudadanía de la Unión: los ciudadanos de ésta, *mutatis mutandis*, deben poder circular entre los Estados miembros en condiciones similares a las de los nacionales de un Estado miembro que se trasladen o cambien su lugar de residencia en su propio país.

La propuesta tiene varias finalidades:

- reagrupar el complejo corpus de la legislación existente en un instrumento legislativo único que establezca un solo sistema aplicable a todas las categorías de personas (trabajadores, estudiantes, personas sin actividad);
- racionalizar la legislación actual, teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJCE y las disposiciones de la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la UE en lo que se refiere a la unidad familiar y a la protección de la vida familiar;
- simplificar las condiciones y los trámites administrativos asociados al ejercicio del derecho de libre circulación y residencia en los Estados miembros;
- facilitar el derecho de libre circulación y residencia de los miembros de la familia del ciudadano de la Unión, con independencia de su nacionalidad.

### III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN QUE FIGURA EN EL DOC. 13263/03

La posición común del Consejo está en total consonancia con el objetivo principal de la propuesta de la Comisión, consistente en facilitar el ejercicio del derecho de libre circulación y residencia reduciendo los trámites administrativos, estableciendo una definición más clara de la condición de miembros de la familia, creando un derecho permanente de residencia adquirido tras un período de cinco años de residencia legal en un Estado miembro y limitando la posibilidad de que los Estados miembros denieguen o anulen el derecho de residencia por motivos de orden público.

<sup>(1)</sup> DO C 270 E de 25.9.2001, p. 150.

<sup>(2)</sup> DO C 192 de 12.8.2002, p. 17.

<sup>(3)</sup> DO C 149 de 21.6.2002, p. 46.

Sin embargo, el Consejo ha hecho una serie de cambios respecto de la propuesta original de la Comisión, que ésta ha podido aceptar. Además de los cambios en cuanto al fondo, que se citan a continuación, la posición común incorpora algunos cambios de redacción y de carácter técnico, con el fin de aclarar determinadas disposiciones, garantizar la coherencia interna y actualizar la terminología.

**A. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por el Consejo en su posición común**

Las enmiendas 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 25, 28, 34, 39, 40, 55, 59, 61, 64, 68, 71, 72, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 89, 90 y 99 se han incorporado totalmente a la posición común.

Las enmiendas 7, 11, 20, 24, 30, 33, 41, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 64, 68, 74, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 108 y 113 se han incorporado parcialmente en la posición común. En particular:

**Enmienda 7** (considerando 9): esta enmienda estipula que las estancias que no superen los seis meses no estén sujetas a condición alguna. Tras considerarlo detenidamente, el Consejo acordó fijar ese período en tres meses, como en el acervo existente, de conformidad con el nuevo artículo 6. Con todo, se aplicará un trato más favorable a las personas que busquen trabajo, como reconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

**Enmienda 11** (considerando 20): esta enmienda se ha incorporado a la posición común con un ligero cambio, para garantizar su coherencia con el nuevo texto del artículo 21.

**Enmienda 20** (apartado 2 del artículo 3): esta enmienda tiene como finalidad facilitar la entrada y la residencia de los miembros de la familia no definidos en el artículo 2 si existen motivos graves de salud o humanitarios para hacerlo. Estos términos se han incluido parcialmente en la posición común, tras suprimir la referencia a los motivos humanitarios, puesto que el Consejo considera que éstos ya forman parte de los compromisos contraídos por los Estados miembros en el ámbito de los derechos fundamentales.

**Enmienda 24** (apartado 2 del artículo 5): el Consejo ha incluido la enmienda en su posición común, pero no ha aceptado la parte de la enmienda que establece un plazo de cinco días laborables para conceder el visado a los miembros de la familia que sean nacionales de terceros países. El Consejo considera demasiado estricto ese plazo y lo ha sustituido por las palabras «cuanto antes mediante un procedimiento acelerado», que garantizan la flexibilidad y la pronta expedición de los visados.

**Enmienda 30** (apartado 3 del artículo 7): esta enmienda no supone cambio alguno del texto, sino sencillamente el traslado del apartado 7 del artículo 8, y se ha incluido en la posición común. El Consejo, con todo, ha modificado la redacción de la letra c) para dejar claro que, en esta situación concreta, la condición de trabajador se mantendrá durante no menos de seis meses.

**Enmienda 33** (apartado 2 del artículo 8): el Consejo no ha aceptado la parte de la enmienda que declara que las sanciones han de ser administrativas, prefiriendo que sean los Estados miembros los que decidan la naturaleza de las sanciones aplicables de conformidad con sus legislaciones nacionales.

**Enmienda 41** (apartado 2 del artículo 11): el texto de la posición común difiere de esta enmienda sencillamente porque impone un límite de tiempo de un año también para las ausencias por embarazo o maternidad.

**Enmiendas 47, 49, 50 y 51** [apartado 1 y letras a) y b) del apartado 2 del artículo 13]: estas enmiendas, que añaden una referencia a la disolución de las uniones contempladas en la letra b) del apartado 2 del artículo 2, se han añadido a la posición común, aunque se han limitado a las uniones registradas con arreglo al nuevo texto del artículo 2. Además, en la letra a), la duración anterior del matrimonio o de la unión se ha ampliado a tres años, duración que el Consejo considera justa con el fin de limitar los abusos.

**Enmienda 52** [letra c) del apartado 2 del artículo 13]: esta enmienda especifica determinadas situaciones difíciles que justificarían que el derecho de residencia continuara después de un divorcio, anulación del matrimonio o disolución de la unión. La enmienda se ha incluido en la posición común, pero sin referencia a los motivos humanitarios.

**Enmienda 54** (artículo 15): este nuevo artículo sustituye al texto del antiguo artículo 24 (que se ha suprimido); se ha considerado más lógico situarlo al final del capítulo III, ya que la expulsión por razones distintas de las de orden público o seguridad pública no es posible una vez que la persona en cuestión ha adquirido derecho a la residencia permanente. El primer apartado, que se ha añadido para dejar claro que el derecho de residencia se mantiene siempre que se cumplan las condiciones para la residencia, se ha trasladado al artículo anterior.

**Enmienda 55** (apartado 3 del artículo 16): esta enmienda se ha incluido en la posición común, pero se ha cambiado la redacción para no imponer límite de tiempo alguno a las ausencias por servicio militar obligatorio.

**Enmienda 64** (apartado 3 del artículo 20): esta enmienda deja claro que las interrupciones de residencia deben durar más de dos años cada vez para que afecten a la validez del permiso de residencia permanente, y se ha incluido en la posición común.

**Enmienda 108** (apartado 2 del artículo 24): el Consejo ha aceptado esta enmienda, añadiendo que el Estado miembro de acogida no está obligado a conceder el derecho a prestaciones de asistencia social durante los tres primeros meses de residencia, con arreglo al nuevo artículo 6 bis.

**Enmienda 68** (apartado 1 del artículo 25): esta enmienda aclara el texto y especifica que la persona de que se trate podrá demostrar por cualquier otro medio que es beneficiaria de los derechos que se derivan de la Directiva.

**Enmienda 74** (apartado 3 del artículo 27): se ha añadido la referencia a un período de tres meses para atender a la situación de los Estados miembros que no exigen el requisito de registro.

**Enmienda 77** (apartado 1 del artículo 29): para este apartado se propuso una serie de enmiendas, que se han incluido en la posición común. El Consejo ha sustituido la referencia al Reglamento Sanitario Internacional de 1951 por otra, más general, a los instrumentos pertinentes de la OMS.

**Enmienda 78** (apartado 2 del artículo 29): mención de un período de tres meses en lugar de la fecha de registro o la fecha de concesión de la tarjeta de residencia, lo cual se ajusta más a la estructura de la Directiva y abarca además la situación de los Estados miembros que no exigen el requisito de registro. Se ha suprimido la referencia a la denegación del permiso de residencia permanente, ya que éste no puede denegarse por razones de salud pública.

**Enmienda 79** (apartado 3 del artículo 29): la referencia a un período de tres meses está pensada para limitar el período durante el cual los Estados miembros pueden exigir a las personas que se sometan a un examen médico; esto es coherente con el texto del apartado anterior.

**Enmienda 82** (apartado 1 del artículo 30): se establece ahora un único plazo para abandonar el territorio, a saber: un mes a partir de la fecha de notificación.

**Enmienda 83** (apartado 1 del artículo 31): esta enmienda deja claro que siempre debe existir la posibilidad de recurso jurisdiccional y que también será posible el recurso administrativo cuando así lo establezca el Estado miembro de acogida.



**Enmienda 113** (apartado 2 del artículo 31): esta enmienda se ha incorporado a la posición común tal como se volvió a redactar en la propuesta modificada de la Comisión. Contempla la suspensión de la ejecución de las decisiones de expulsión mientras no se haya dictado la orden provisional de expulsión. Sin embargo, el Consejo ha decidido incluir una serie de excepciones que, a su juicio, no afectan al objetivo principal de la disposición. Las excepciones contemplan la exclusión de los casos en que la decisión de expulsión se base en una resolución judicial previa, las personas de que se trate hayan tenido acceso previamente al recurso jurisdiccional, o la decisión se base en motivos imperiosos de seguridad pública.

**Enmienda 86** (apartado 1 del artículo 32): las modificaciones del primer párrafo hacen que el texto resulte más claro. El plazo de seis meses que sustituye al de tres meses en el segundo párrafo es más realista y se ha incorporado a la posición común.

#### **B. Enmiendas del Parlamento Europeo rechazadas por el Consejo**

**Enmienda 2** (antiguo considerando 4): esta enmienda subraya que la movilidad de los trabajadores asalariados o no asalariados es también una prioridad política de la Unión; no se ha incluido en la posición común, dado el planteamiento de simplificación del texto.

**Enmienda 11:** esta enmienda, propuesta para el antiguo considerando 19, no puede aceptarse por ser incoherente con el nuevo texto del artículo 24.

**Enmiendas 4, 14, 15 y 16:** el texto de estas enmiendas reconoce como miembros de la familia al cónyuge y a la pareja inscrita, con independencia de su sexo, con arreglo a la legislación nacional pertinente, y a la pareja de hecho, con independencia de su sexo, con los que el ciudadano de la Unión tenga una relación duradera, cuando la legislación o la práctica de los Estados miembros de origen y/o de acogida conceda el mismo trato a las parejas casadas y a las que no lo estén, y de acuerdo con las condiciones que establezca la citada legislación. Estas enmiendas no han sido aceptadas por las razones siguientes:

En relación con el matrimonio, el Consejo ha sido reacio a optar por una definición del término «cónyuge» que haga referencia específica a esposos del mismo sexo. De momento sólo dos Estados miembros tienen disposiciones legales para los matrimonios de personas del mismo sexo. Además, en su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia deja claro que, según la definición generalmente aceptada por los Estados miembros, el término «matrimonio» significa la unión entre personas de sexo opuesto.

En relación con las parejas, ya sean inscritas o de hecho, el Consejo opina que el reconocimiento de esas situaciones debe basarse exclusivamente en la legislación del Estado miembro de acogida. El reconocimiento a efectos de residencia de las parejas de hecho, de conformidad con la legislación de otros Estados miembros, podría plantear problemas al Estado miembro de acogida si su legislación familiar no reconoce esta posibilidad. Conceder a las parejas de otros Estados miembros derechos que no reconoce a sus propios nacionales podría crear, en realidad, una discriminación inversa, que debe evitarse.

**Enmiendas 17 y 18:** estas enmiendas propuestas, que insertarían en las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 2 una referencia específica a los familiares por línea ascendente y descendente de las parejas inscritas, no pueden aceptarse.

**Enmienda 19:** esta enmienda propuesta incorporaría al apartado 3 del artículo 2 la definición del Estado miembro de acogida y los criterios que se utilizarían para determinar qué es una relación duradera. Esta referencia a la legislación del Estado miembro de acogida no resulta aceptable a efectos de definir al cónyuge o la pareja.

**Enmienda 21** (antiguo artículo 4): esta enmienda, que hace más específica la prohibición de discriminación al añadir la identidad de género a la definición, no se ha aceptado. El texto incluido en el considerando 31, que sustituye al antiguo artículo 4, sigue la redacción exacta del artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales.

**Enmiendas 26, 32 (parcialmente), 42, 43 y 44:** estas enmiendas no pueden aceptarse porque alterarían sustancialmente la estructura de la Directiva e irían en contra del planteamiento adoptado por la Comisión y el Consejo.

**Enmienda 27** [letra a) del apartado 1 del artículo 7]: esta enmienda incluye una referencia directa a quienes reciben servicios, pero el Consejo considera que quienes reciben servicios no pueden tratarse del mismo modo que los trabajadores asalariados o no asalariados.

**Enmienda 32** (apartado 1 del artículo 8): esta enmienda no se ha incluido en la posición común porque el Consejo estima que los Estados miembros no deben verse obligados a emitir certificados de registro si no han optado por el sistema de registro.

**Enmienda 35** [letra b) del apartado 5 del artículo 8]: esta enmienda no se ha incluido en la posición común porque el Consejo estimó que la mera declaración de la existencia de una relación familiar no es suficiente para demostrar la relación familiar. Este planteamiento está en consonancia con el seguido para el sistema de registro (artículo 8).

**Enmienda 38** (artículo 9): esta enmienda refleja los argumentos enunciados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 25 de julio de 2002 (Asunto C-459/99) MRAX. No se ha incluido en la posición común porque el Consejo la considera contradictoria con el artículo 10, en el que se encuentra una lista exhaustiva de todos los documentos necesarios para obtener un permiso de residencia, y el visado no figura entre ellos.

**Enmienda 62** (apartado 1 del artículo 20): la propuesta de que el permiso de residencia tenga una validez ilimitada y también pueda renovarse cada diez años parece contradictoria. En el texto incluido en la posición común se ha suprimido, pues, la frase final del párrafo relativo a la renovación, y el Consejo ha optado por la renovación del permiso cada diez años.

**Enmienda 76** (antiguo apartado 5 bis del artículo 25): esta enmienda impone a los Estados miembros el requisito de notificar a la Comisión cualquier decisión de expulsión de ciudadanos de la Unión o de miembros de sus familias. Esta enmienda no se ha incluido en la posición común porque el Consejo considera que el procedimiento sería demasiado engorroso para los Estados miembros, sin ofrecer ninguna ventaja a los ciudadanos de la Unión.

**Enmienda 84** (apartado 2 del artículo 31): el objetivo de esta enmienda, que establece la supresión de la primera frase, es garantizar que todas las decisiones estén sujetas a supervisiones previas de una autoridad independiente, no sólo cuando se disponga el recurso administrativo. No se ha incluido en la posición común porque se ha suprimido todo el apartado.

**Enmienda 88** (antiguo artículo 31 bis): la enmienda establece un artículo nuevo que recoge el contenido del antiguo apartado 2 del artículo 31. El Consejo ha preferido mantener un artículo único al considerar que el apartado 2 se refiere solamente a las órdenes contempladas en el apartado 1.

**Enmiendas 91, 92 y 93** (artículos 38, 39 y 40): estas enmiendas se refieren a las medidas que habrán de tomarse después de la fecha de entrada en vigor de la Directiva. El Parlamento propuso julio de 2004, pero dada la marcha de los procedimientos esa fecha no parece realista. Ésta es la razón por la que el Consejo ha optado por dos años después de la fecha de entrada en vigor de la Directiva.

**Enmiendas 22, 23, 31, 45, 53, 56, 57, 58, 60, 63, 66 y 69:** estas enmiendas no pudieron aceptarse al considerarse que no son coherentes con la propuesta de la Comisión.

### C. *Nuevos elementos introducidos por el Consejo*

Los puntos principales de la posición común que difieren de la propuesta de la Comisión son los siguientes:

#### — Considerandos

Los considerandos se han adaptado para garantizar la coherencia con las enmiendas introducidas en el texto del articulado. Se han suprimido las referencias al Tratado CE porque carecerían de sentido tras la entrada en vigor de la futura Constitución.

Tres considerandos son elementos nuevos respecto de la propuesta modificada de la Comisión, en particular:

**Considerando 6:** este considerando se ha añadido para aclarar el concepto de facilitación que establece el artículo 3.

**Considerando 16:** este considerando establece los elementos y los criterios que han de considerarse para establecer si una persona se ha convertido en una carga no razonable y el Estado miembro puede proceder a su expulsión. El Consejo considera que este considerando debería facilitar indicaciones útiles en cuanto a los criterios que han de seguirse para establecer si una persona se ha convertido en una carga no razonable.

**Considerando 31:** el antiguo artículo 4 relativo a la prohibición de las discriminaciones se ha suprimido y su contenido se ha añadido a este considerando sobre los derechos fundamentales. Puesto que la prohibición de la discriminación corresponde a los principios generales del Derecho Comunitario, el Consejo prefiere incluirla en el preámbulo.

#### — Articulado

**Artículos 2 y 3:** estos artículos, relativos a la definición de los miembros de la familia y de los beneficiarios, ha sido uno de los puntos centrales de la propuesta, y la posición común ha modificado algunos de sus elementos, en particular:

##### — *Concepto de pareja inscrita y de relación duradera*

La posición común ha limitado esta definición a la pareja inscrita únicamente, cuando la legislación del Estado miembro de acogida trate a las parejas inscritas de forma equivalente a las parejas casadas, excluyendo, pues, las relaciones duraderas del ámbito de aplicación del artículo 2. De manera paralela, se ha modificado el artículo 3 para que establezca la facilitación de la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantenga una relación duradera, debidamente demostrada. En el considerando 6 bis se aclara el concepto de facilitación.

##### — *Otros miembros de la familia*

Por lo que se refiere a los descendientes directos y a los familiares por línea ascendente del ciudadano de la Unión, el Consejo ha decidido mantener el acervo existente, restableciendo los requisitos de edad y dependencia.

**Artículo 6 (nuevo):** los antiguos artículos 5 y 6 se han trasladado a un artículo nuevo en aras de la claridad. La posición común no ha aceptado la ampliación del plazo de residencia incondicional a seis meses, prefiriendo mantener el acervo existente de tres meses. Con todo, se ha incluido en el artículo 39 una cláusula de revisión por la que la Comisión se compromete a estudiar la necesidad de ampliar este período en el informe sobre la aplicación de la Directiva, que presentará dos años después de su incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales.

**Apartado 4 del artículo 7:** el derecho a la reunificación familiar para los estudiantes se ha limitado al núcleo familiar, como en el acervo existente. Sin embargo, la entrada y la residencia de los ascendientes a cargo se facilitará con arreglo al artículo 3.

**Artículo 8:** por lo que se refiere a los trámites administrativos para los ciudadanos de la Unión, y para prevenir los abusos, la posición común insta a un sistema mediante el cual los Estados miembros pueden exigir que los ciudadanos de la Unión presenten pruebas de que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 7. Sin embargo, este sistema es flexible porque el certificado de registro se expide en el momento y el cumplimiento de los requisitos se comprueba sólo en casos concretos en los que exista una duda razonable, como contempla el apartado 2 del artículo 14. En el apartado 4 se ha previsto la posibilidad de que los Estados miembros aporten una cantidad suficiente de recursos, pero permitiendo tener en cuenta la situación personal del interesado.

**Apartado 1 del artículo 11:** la posición común añade que el permiso de residencia expedido a los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que no sean nacionales de un Estado miembro podrá tener una validez inferior a cinco años, con el fin de que corresponda al período de residencia previsto del ciudadano de la Unión, cuando este período sea inferior a cinco años.

**Apartado 2 del artículo 12:** la posición común añade el requisito de que los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro hayan residido en el Estado miembro de acogida durante un año por lo menos antes de la muerte del ciudadano de la Unión, para poder conservar su derecho de residencia. Otra condición incluida en la posición común contempla que los miembros de la familia conserven su derecho de residencia exclusivamente con carácter personal. Estas condiciones reflejan la preocupación justificada de las Delegaciones por prevenir los abusos, pero establecen simultáneamente un vínculo proporcionado con el Estado miembro de acogida.

**Letra d) del apartado 2 del artículo 13:** la posición común añade la situación en que, en caso de divorcio, anulación matrimonial o disolución de la unión inscrita, el cónyuge o pareja que no sea nacional de un Estado miembro no pierde el derecho de residencia, siempre que un tribunal haya fallado el derecho de acceso a un hijo menor de edad en el Estado miembro de acogida.

**Artículos 14 y 15:** el antiguo artículo 13 se ha dividido en dos artículos y se ha aclarado su contenido. El artículo 14 especifica las circunstancias en que un Estado miembro puede expulsar a ciudadanos de la Unión cuando dejen de reunir las condiciones que dieron lugar a su derecho de residencia.

Se ha establecido que las medidas de expulsión no pueden ser consecuencia automática del recurso a los regímenes de asistencia social, integrando así en el texto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-184/99, Grzelczyk. Además, el nuevo considerando 16 aclara aún más el concepto de carga no razonable, que podría dar lugar a la medida de expulsión.

En el nuevo artículo 15 se han incluido las normas relativas a las garantías procesales, sin modificación alguna.

**Artículo 16:** el período de residencia legal continuada en el Estado miembro de acogida, necesario para adquirir el derecho a la residencia permanente, se ha fijado en cinco años en lugar de los cuatro propuestos. Este cambio ha permitido incluir a los estudiantes entre los beneficiarios del derecho de residencia permanente.

En el apartado 3, la posición común ha reducido el período de ausencia que conlleva la pérdida del derecho de residencia permanente a dos años en vez de los cuatro propuestos. Esta modificación ha dado lugar a su vez a un cambio en el apartado 3 del artículo 20 sobre la validez del permiso de residencia permanente, lo que podría justificarse porque después de dos años de ausencia habría que considerar disuelto el vínculo con el Estado miembro de acogida.

**Letra a) del apartado 4 del artículo 17:** el período de residencia en el Estado miembro de acogida antes de la adquisición del derecho de residencia permanente se ha fijado en dos años, como en el acervo existente. Este cambio garantiza, una vez más, un vínculo fuerte con el Estado miembro de acogida.

**Artículos 19 y 20:** los ciudadanos de la Unión ya no están obligados a estar en posesión de un permiso de residencia permanente. Los Estados miembros podrán expedirles un documento que certifique que han adquirido el derecho de residencia permanente. Este documento se expedirá previa solicitud del interesado y previa comprobación de la duración de la residencia. Este planteamiento obedece al objetivo de reducir los trámites administrativos para los ciudadanos de la Unión.

Por lo que se refiere a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro, éstos deberán estar en posesión de un permiso de residencia permanente, que será renovable automáticamente cada diez años. El plazo que introduce la posición común permite la actualización de los datos.

**Artículo 24:** en el apartado 1 se ha añadido que la igualdad de trato está sujeta a las disposiciones específicas que establecen expresamente el Tratado y el derecho derivado. En el apartado 2, la posición común especifica que los Estados miembros no están obligados a conceder ayudas al estudio que consisten en becas o préstamos a las personas que no sean trabajadores asalariados o no asalariados.

**Artículo 27:** el antiguo tercer párrafo del apartado 2 se ha suprimido porque su interpretación podría permitir considerar como amenaza al orden público cualquier comportamiento sancionable a escala nacional. El apartado 3 se ha trasladado al artículo 15, ya que la caducidad de un documento de identidad no puede estimarse contraria al orden público.

**Artículo 28:** el Consejo está casi unánimemente en contra de la protección absoluta contra la expulsión, aunque ha aceptado una mayor protección para los ciudadanos de la Unión que hayan residido durante un largo período en el Estado miembro de acogida. Tras la adquisición del derecho de residencia permanente, los ciudadanos de la Unión sólo pueden ser expulsados por motivos graves de orden público o seguridad pública.

Los ciudadanos de la Unión que sean menores de edad o que hayan residido durante diez años en el Estado miembro de acogida sólo podrán ser expulsados por motivos imperiosos de seguridad pública.

**Artículo 31:** se ha suprimido el antiguo apartado 2, porque la posición común confirma ya la obligación de los Estados miembros de establecer procedimientos de recurso que permitan estudiar los hechos y las circunstancias, y existe la posibilidad de suspender la medida de expulsión, por lo que el apartado 2 sería redundante.

En el apartado 4, la posición común añade una excepción al principio de presentar personalmente la defensa, cuando la intervención pueda ocasionar serios trastornos al orden público o la seguridad pública o cuando la apelación o recurso se refiera a una denegación de entrada en el territorio.

**Artículo 32:** se ha suprimido el apartado 1 y su contenido se ha incluido en el considerando 25. En el antiguo apartado 2, el período tras el cual se puede presentar una solicitud de levantamiento de la orden de expulsión se ha fijado en tres años, en lugar de los dos propuestos.

**Artículo 33:** en el apartado 2 se ha aclarado que la evaluación de si se ha producido algún cambio en las circunstancias desde la adopción de la medida de expulsión se efectuará únicamente cuando la orden de expulsión se ejecute más de dos años después de su expedición.

**Artículo 35:** se añade este artículo nuevo para aclarar que los Estados miembros podrán denegar, anular o retirar cualquier derecho que confiera la Directiva en caso de abuso de derechos o de fraude.

#### IV. CONCLUSIÓN

La posición común representa una solución justa y equilibrada de las cuestiones que plantea la Directiva propuesta, y se encamina a lograr el objetivo de afianzar el concepto de ciudadanía de la Unión y de reforzar los derechos de los ciudadanos de la Unión en el ámbito de la libertad de circulación y de residencia. Se ha incorporado totalmente gran número de enmiendas del Parlamento Europeo, mientras que otras se han integrado al menos parcialmente o se han tenido en cuenta, en el intento de redactar un texto equilibrado.

---